

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL
Manizales, veintitrés (23) de abril de dos mil veintiuno (2021)

SENTENCIA DE TUTELA 60

RAD. 2021-000218

Procede el Juzgado a decidir la acción de tutela instaurada por **JUAN CARLOS PEREZ BERNAL** en contra de la **SECRETARÍA DE TRÁNSITO DE MANIZALES**, por la presunta vulneración a su derecho fundamental de petición. Tramite constitucional al que se vinculó al **CONSORCIO SERVICIOS DE TRANSITO DE MANIZALES**.

I. ANTECEDENTES

Afirma el accionante que el pasado 06 de marzo del año avante, envió derecho de petición a la accionada a través de empresa de mensajería, el cual fue entregado el día 08 del mismo mes.

Pese haberse vencido el tiempo legal la Secretaría de Tránsito y Transporte no ha brindado respuesta a su solicitud.

II. PRETENSIONES

Se pretende con esta acción, se tutele el derecho fundamental invocado.

III. PRUEBAS

Aportadas por la accionante:

Copia del derecho de petición y la guía de envío.

IV. TRÁMITE

Mediante auto fechado 16 de abril de 2021, se admitió la acción de tutela, se decretaron las pruebas presentadas por la parte demandante y se dispuso la notificación a la entidad accionada, para que se sirva dar respuesta al escrito de tutela, dentro del término de (2) días hábiles y solicitara las pruebas que pretenda hacer valen para su defensa. Así mismo, se ordenó la vinculación del Consorcio Servicios de Tránsito de Manizales.

V. PRONUNCIAMIENTO DE LAS ENTIDADES ACCIONADA Y VINCULADA.

El doctor **CRISTIAN MATEO LOAIZA ALFONSO**, Secretario de Despacho de la Secretaría de Movilidad, contestó la acción de tutela e indicó que ni la Secretaría ni el Consorcio Servicios de Tránsito de Manizales, han vulnerado los derechos fundamentales del accionante, pues el derecho de petición aun se encuentra dentro de los términos legales para ser respondido, ello de acuerdo al Decreto 491 de 2020, el cual amplió el tiempo para contestar las solicitudes. No obstante, luego de realizar las consultas necesarias, procedieron a emitir respuesta al derecho de petición y fue enviada por medio de la empresa de mensajería Servientrega a la dirección del actor.

En virtud de lo anterior, solicitan se declare la carencia actual de objeto por hecho superado.

VI. PROBLEMA JURÍDICO.

Una vez desplegados los anteriores supuestos fácticos, se procederá a determinar si efectivamente se vulneró el derecho fundamental constitucional de **PETICIÓN** al accionante por parte de la entidad accionada, al no brindar respuesta al derecho de petición incoado o por el contrario se presentó una carencia actual de objeto por hecho superado.

En esas condiciones se encuentra el expediente a despacho, y procede esta Funcionaria Judicial a resolver lo pertinente, de conformidad con las siguientes:

VII. CONSIDERACIONES

DEL DERECHO DE PETICIÓN

Según el artículo 23 de la Constitución Política, toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución, para lo cual el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al reglamentar dicho ejercicio consagra en su artículo 14 el término para resolver así: Salvo norma legal especial toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Las peticiones de documentos deberán resolverse dentro de los diez (10) días y aquellas mediante las cuales se eleva una consulta deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes. Cuando no fuere posible resolver o contestar en dicho plazo, se deberá informar así al interesado, antes del vencimiento señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.

Frente a las características esenciales del derecho de petición, la Corte Constitucional considera que el núcleo esencial de esta prerrogativa reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, sin que necesariamente deba acceder positivamente a sus requerimientos. En ese sentido ha manifestado:

“(i) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión; (ii) el núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión; (iii) la petición debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo más corto posible¹; (v) la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita; (vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en algunos casos a los particulares²; (vii) el silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para agotar la vía gubernativa y acceder a la vía judicial, no satisface el derecho fundamental de petición³ pues su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición; (viii) el derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa⁴; (ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera del deber de responder;⁵ y (x) ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al interesado”.⁶

De otro lado ha dicho la jurisprudencia⁷ que la respuesta puede o no satisfacer los intereses de quien ha elevado la petición, en el sentido de acceder o no a sus pretensiones, pero siempre debe ser una contestación que permita al peticionario conocer, frente al asunto planteado, cuál es la situación y disposición o criterio en el ente respectivo. En ese sentido afirma que se satisface ese derecho cuando se emiten y reciben respuestas que abarcan en forma sustancial y resuelven, en lo procedente, la materia objeto de solicitud, independientemente del sentido dado.

También ha reiterado la Alta Corporación⁸ que el derecho de petición exige concretarse en una pronta y oportuna respuesta por parte de la autoridad ante la cual ha sido elevada la solicitud, sin importar que la misma sea favorable a los intereses del peticionario y escrita, pero en todo caso debe *“cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.”* (La sub línea es del despacho).

Finalmente, el Decreto 491 de 2020, por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, en su artículo 5 dispuso:

Artículo 5. Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así:

¹ Sentencia T-481 de 1992, M.P. Jaime Sanín Greiffenstein.

² Al respecto véase la sentencia T-695 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

³ Sentencia T-1104 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda.

⁴ Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994.

⁵ Sentencia 219 de 2001, M.P. Fabio Morón Díaz.

⁶ Sentencia 249 de 2001, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

⁷ Sentencia T-183 de 2013, M.P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla.

⁸ Sentencia T-146-2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

(i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción.

(ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción.

Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en el presente artículo expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto en este artículo.

Parágrafo. La presente disposición no aplica a las peticiones relativas a la efectividad de otros derechos fundamentales.

VIII. CASO CONCRETO

El señor Juan Carlos Pérez Bernal, presentó acción de tutela con el fin de que la Secretaría de Transito y Transporte de Manizales, procediera a dar respuesta de fondo al derecho de petición presentado el día 08 de marzo de 2021.

Sobre el particular, el Secretario de despacho de la Secretaría de Movilidad de Manizales indicó que ni la secretaría ni el consorcio servicios de transito de Manizales habían vulnerado el derecho de petición al accionante, pues todavía se encuentran dentro del termino para brindar respuesta, no obstante, para atender la solicitud del actor procedieron a emitir la contestación enviándosela de manera física a través de la empresa de mensajería Servientrega con numero de guía 2106575148, sin embargo, no aportaron prueba que soportara su manifestación.

En aras de confirmar la información brindada por la accionada, este Despacho el 21 de abril de 2021 procedió a comunicarse con el accionante para que informara si había recibido la respuesta que la entidad afirmaba haber enviado y manifestó que no había recibido ninguna ni a su dirección física ni electrónica. De igual modo, el 22 de abril avante, envió un correo electrónico a través del cual precisó:

“Para los fines pertinentes, en mi calidad de accionante de la tutela contra la Secretaría de Tránsito y Transporte de Manizales, le informo que a la fecha (22 de abril de 2021), la entidad demandada no me ha dado respuesta alguna... Agradezco al Juzgado adelantar las acciones necesarias para proteger el derecho fundamental invocado en la demanda.”

De otro lado, el juzgado consultó el número de guía 2106575148 en el sistema de rastreo de envíos de la empresa Servientrega (archivo 10 expediente digital) de la cual se extrajo que efectivamente la Secretaría de Tránsito envió una encomienda con ese consecutivo, pero no se pudo establecer a quién iba dirigida, ni que contenía, tampoco

la fecha de entrega, pero si llama la atención del Despacho que la ciudad de destino es Rionegro, Antioquia, la cual no coincide con la residencia del accionante, pues su dirección de residencia es en la ciudad de Bogotá, tal como lo informó en el escrito de tutela y en el derecho de petición dirigido a la accionada, por lo que partiendo de la buena fe y si en gracia de discusión se aceptara que la Secretaría brindó una respuesta, esta no fue puesta en conocimiento del actor, ya que él afirma no haberla recibido y en con la guía se muestra envió a una ciudad completamente diferente a la que vive el señor Pérez Bernal.

En ese sentido, hay que tener en cuenta, sobre la prerrogativa en particular, que el artículo 23 de la Constitución Política establece que *“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”*.

Con fundamento en la citada norma, en varias oportunidades esta corporación ha definido el ámbito de protección del derecho fundamental de petición. Así las cosas este incorpora en su núcleo esencial los siguientes elementos:⁹

- (1) El derecho a presentar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas puedan negarse a recibirlas o tramitarlas.
- (2) El derecho a obtener una respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos establecidos en las normas correspondientes.
- (3) El derecho a recibir una respuesta de fondo, lo que implica que la autoridad a la cual se dirige la solicitud, de acuerdo con su competencia, se pronuncie de manera completa y detallada sobre todos los asuntos indicados en la petición, excluyendo referencias evasivas o que no guardan relación con el tema planteado; esto, independientemente de que el sentido de la respuesta sea favorable o no a lo solicitado.
- (4) El derecho a obtener una pronta comunicación de lo decidido.

Se concluye entonces, que el derecho de petición consagra de un lado la facultad de presentar solicitudes respetuosas a las entidades públicas y privadas y de otro lado, el derecho a obtener respuesta oportuna, clara, completa y de fondo al asunto solicitado. La jurisprudencia constitucional también ha resaltado que la respuesta de la autoridad debe incluir un análisis profundo y detallado de los supuestos fácticos y normativos que rigen el tema, así, se requiere *“una contestación plena que asegure que el derecho de petición se ha respetado y que el particular ha obtenido la correspondiente respuesta, sin importar que la misma sea favorable o no a sus intereses”*.

En suma, le corresponde al juez constitucional revisar si los lineamientos dispuestos por la ley para considerar que efectivamente se ha dado una apropiada respuesta, se han respetado adecuadamente o no. En caso contrario, se estaría ante una clara vulneración del derecho fundamental de petición, momento en el cual el juez de tutela podrá ordenar

⁹ Sentencia T-369-13

a la respectiva autoridad producir o darle a conocer debidamente al solicitante, la contestación que resuelva de manera efectiva lo requerido.

En el sub judice, como bien se indicó en precedencia, se encuentra probado que el accionante presentó derecho petición ante la entidad accionada, recibido el 08 de marzo de 2021, los términos de que trata el artículo 5° del Decreto 491 de 2020 se encuentra vencidos sin que se hubiese demostrado la respuesta emitida por la Secretaría de Tránsito a la solicitud del actor, por el contrario, continúa indicando no haber recibido la contestación de parte de la Secretaría.

Por lo anterior, atendiendo que a la solicitud radicada por el accionante el 08 de marzo de 2021, ante la Secretaría de Movilidad Manizales - Consorcio Servicios de Tránsito de Manizales, y no se le ha brindado respuesta, habiéndose agotado ya los términos para emitirla, es procedente tutelar su derecho fundamental, ordenando a la citada entidad que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo brinde una respuesta completa, de fondo, de forma clara, precisa, de manera conveniente, coherente y lógica con lo solicitado, por el señor Juan Carlos Pérez Bernal, debiendo además ser puesta en conocimiento del mismo a su dirección de notificaciones "Trans.22 a N° 60 a 17 Apto 406 Bogotá D.C correo electrónico jotacarlos5@yahoo.com, numero celular 313 268 0482".

Finalmente se aclara que atendiendo que el Consorcio Servicios de Tránsito de Manizales funciona como una dependencia adscrita a la Secretaría de Movilidad de Manizales, corresponderá a ambas de manera coordinada cumplir con lo aquí ordenado.

Por lo expuesto, el Juzgado Sexto Civil de Manizales, Caldas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley:

RESUELVE

PRIMERO: CONCEDER la tutela del derecho fundamental de petición del señor **JUAN CARLOS PEREZ BERNAL** frente a la **SECRETARÍA DE MOVILIDAD MANIZALES - CONSORCIO SERVICIOS DE TRANSITO DE MANIZALES**.

SEGUNDO: ORDENAR a la **SECRETARÍA DE MOVILIDAD MANIZALES - CONSORCIO SERVICIOS DE TRANSITO DE MANIZALES** que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo brinde una respuesta completa, de fondo, de forma clara, precisa, de manera conveniente, coherente y lógica con lo solicitado, por el señor Juan Carlos Pérez Bernal, debiendo además ser puesta en conocimiento del mismo a su dirección de notificaciones "Trans.22 a N° 60 a 17 Apto 406 Bogotá D.C correo electrónico jotacarlos5@yahoo.com, numero celular 313 268 0482".

TERCERO: ADVERTIR a **SALUD TOTAL E.P.S.**, que el incumplimiento de lo aquí dispuesto los hará acreedores a las sanciones dispuestas en los artículos 52 y 53 del Decreto 2591.

CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito a las partes, informándoles en tal acto que pueden impugnar esta decisión dentro de los tres días siguientes a su notificación.

QUINTO: De no ser impugnada esta sentencia, se ordena remitir el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


VALENTINA SANZ MEJÍA

JUEZ

JCB

Firmado Por:

VALENTINA SANZ MEJIA

JUEZ

JUEZ - JUZGADO 006 MUNICIPAL CIVIL DE LA CIUDAD DE MANIZALES-CALDAS

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **52864b75ad4db71a5b8e64ab6760cdf74a3d4b88919dab81f9dd49e2a8aeb5ad**

Documento generado en 23/04/2021 03:41:11 PM